

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN

Vista Número 1393

Panamá, 29 de noviembre de 2019.

**Proceso contencioso
Administrativo de Indemnización.**

Contestación de la demanda.

El Licenciado Pablo Ruiz, actuando en representación de **Jorge Enrique Pardo Rodríguez**, solicita que se condene al Estado panameño, por conducto del Órgano Judicial al pago de ochocientos mil balboas (B/.800,000.00), en concepto de indemnización por los daños y perjuicios supuestamente causados debido al mal funcionamiento del Servicio Público de Administración de Justicia.

Honorable Magistrado Presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia.

Acudo ante el Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que dice, cito: "**La Procuraduría de la Administración ejercerá las siguientes funciones: ... 2. Representar los intereses nacionales, municipales, de las entidades autónomas y, en general, de la Administración Pública en los procesos contencioso-administrativos, que se originen en demandas de plena jurisdicción e indemnización, iniciados ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia...**", con el propósito de contestar la demanda contencioso administrativa de indemnización descrita en el margen superior.

I. Oposición a las pretensiones del demandante.

Respetuosamente nos oponemos a la pretensión formulada por el demandante consistente en que la Sala Tercera emita una condena económica en contra del Estado panameño, específicamente al Órgano Judicial, por la suma de ochocientos mil balboas (B/.800,000.00), en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a **Jorge Enrique Pardo Rodríguez**, debido al

supuesto mal funcionamiento de los servicios públicos de administración de justicia adscrito a dicho ente estatal, con fundamento en el numeral 10 del artículo 97 del Código Judicial (Cfr. fojas 5-17 del expediente judicial).

II. Los hechos en que se fundamenta la demanda, los contestamos de la siguiente manera:

Primero: No es un hecho; por tanto, se niega.

Segundo: No es un hecho; por tanto, se niega.

Tercero: No es un hecho; por tanto, se niega.

Cuarto: No es un hecho; por tanto, se niega.

Quinto: No es un hecho; por tanto, se niega.

Sexto: No es un hecho; por tanto, se niega.

Séptimo: No es un hecho; por tanto, se niega.

Octavo: No es un hecho; por tanto, se niega.

Noveno: No es un hecho; por tanto, se niega.

Décimo: No es un hecho; por tanto, se niega.

Décimo Primero: No es un hecho; por tanto, se niega.

Décimo Segundo: No es un hecho; por tanto, se niega.

Décimo Tercero: No es un hecho; por tanto, se niega.

Décimo Cuarto: No es un hecho; por tanto, se niega.

Décimo Quinto: No es un hecho; por tanto, se niega.

Décimo Sexto: No es un hecho; por tanto, se niega.

III. Disposiciones que se aducen infringidas.

El apoderado judicial del recurrente, considera infringidas las siguientes disposiciones:

A. Los artículos 1644, 1644-A y 1645 del Código Civil, aprobado mediante la Ley 2 de 22 de agosto de 1916 que, de manera respectiva, establecen el que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa y negligencia, está

obligado a reparar el daño causado; que dentro los daños causados se comprende tanto los materiales como los morales; y la responsabilidad que le compete al Estado por las acciones de sus funcionarios (Cfr. fojas 13-16 del expediente judicial).

III. Antecedentes del caso y descargos de la Procuraduría de la Administración, en representación de los intereses de la entidad demandada.

De acuerdo con lo que se desprende de autos, el 27 de mayo de 2010, cuando arribaron a la ciudad de Panamá **Jorge Pardo Rodríguez**, Asistente Operativo de la empresa de Transporte Estratégico de Valores S.A., y Alexander Gutiérrez Sierra, Coordinador de Seguridad de la empresa de seguridad ESTRAVAL, S.A., procedentes de la ciudad de Cali, República de Colombia, en el vuelo 200 de la aerolínea COPA, los mismos transportaban dos (2) maletines tipo deportivo, los cuales permanecían cerrados con candados y contenían dinero por montos de trescientos cincuenta mil euros (€350,000.00) y novecientos cincuenta mil dólares (\$950,000.00) pertenecientes a la empresa Giros y Finanzas, S.A., sin embargo, ambas personas fueron retenidas por inspectores de migración y trasladados a la Fiscalía de Drogas donde fueron indagados por el Delito de Blanqueo de Capitales y detenidos provisionalmente (Cfr. foja 7 del expediente judicial).

Posteriormente, una vez agotada la etapa sumarial, mediante Auto de 9 de noviembre de 2011, se abrió causa criminal en contra de **Jorge Pardo Rodríguez**, por el delito de Blanqueo de Capitales, pero luego de practicadas sendas pruebas testimoniales y documentales el Juzgado Décimo Cuarto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, dicta la Sentencia 72 de 9 de julio de 2013, absolviendo a **Jorge Pardo Rodríguez** de los cargos que le fueron formulados (Cfr. fojas 8-9 del expediente judicial).

En ese orden de ideas, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas recurre la decisión y el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la Sentencia 88 de 20 de mayo de 2014, revoca la sentencia y declara penalmente responsable a **Pardo Rodríguez**, por el delito de Blanqueo de Capitales, condenándolo a la pena de ocho (8) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo y ordenándose el comiso de los bienes y dineros aprehendidos (Cfr. fojas 9-10 del expediente judicial).

En contra de dicha decisión, se interpuso un recurso de casación y en tal sentido, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia mediante la Resolución de fecha 23 de julio de 2016, y en consecuencia absolvió al hoy actor (Cfr. fojas 10-11 del expediente judicial).

En este contexto, el 16 de agosto de 2017, **Jorge Pardo Rodríguez**, actuando por conducto de su apoderado judicial, presentó ante la Sala Tercera la demanda de reparación directa cuyo objeto es que se condene al Estado, por conducto del Órgano Judicial, a pagarle la suma de ochocientos mil balboas (B/.800,000.00), en concepto de daños y perjuicios, por el mal funcionamiento de los servicios públicos (Cfr. fojas 5-17 del expediente judicial).

Entre las normas que invoca como infringidas, el recurrente aduce la violación de los artículos 1644, 1644-A y 1645 del Código Civil, y señala que el actuar de la entidad demandada le ocasionó daños materiales y morales que hasta el momento no le han sido resarcidos (Cfr. fojas 13-16 del expediente judicial).

De igual manera, señala que la mala prestación del servicio público de Administración de Justicia, se dio por haberlo mantenido privado de su libertad por un tiempo importante, se le impidió salir del país, alejándolo de su país, de su núcleo familiar y de sus amistades, durante más de seis (6) años, con la

consecuente pérdida de su empleo y modo de ganarse la vida lícitamente (Cfr. foja 11 del expediente judicial).

Dicho lo anterior, y luego de haber realizado un análisis de las constancias que reposan en autos, esta Procuraduría considera que **no le asiste la razón al recurrente**, en cuanto a la carencia de sustento que se advierte en la tesis planteada, respecto de lo actuado por el **Órgano Judicial**.

Lo indicado en el párrafo que antecede encuentra jurídicamente su sustento en lo que a continuación pasamos a explicar:

Como primer elemento a considerar, debemos tener presente que fue la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas que el 28 de mayo de 2010, decretó la aplicación de una medida cautelar consistente en la Detención Preventiva de **Jorge Pardo Rodríguez**; con base al artículo 2140 del Código Judicial, contemplando una serie de elementos, tales como, la pena mínima; la acreditación del hecho y su vinculación con la persona; y la posibilidad de desatención al proceso y no el **Órgano Judicial** (Cfr. foja 346-354 del expediente penal presentado por el actor).

De lo anterior se desprende, que si bien el Ministerio Público no es el demandado, la Fiscalía, al momento de adoptar la medida de detención provisional, lo hizo luego de un análisis del contenido de la norma, en concordancia con una adecuada ponderación de los elementos que reposaban en autos, motivo por el cual, resulta **jurídicamente improcedente exigir una compensación derivada de un supuesto daño, cuando la acción que trajo como consecuencia el supuesto perjuicio se dio dentro del marco de la ley.**

Concluida la etapa sumarial y remitido el expediente penal mediante Vista Fiscal 252-11 el 19 de mayo de 2011, asume el conocimiento el Juzgado Décimo Cuarto de Circuito de los Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, y se realizan las audiencias y prácticas de pruebas correspondientes, concluyendo en

Sentencia 72 de fecha 9 de julio de 2013, Absolver de los cargos formulados a **Jorge Pardo Rodríguez** y Alexander Gutiérrez Sierra (Cfr. foja 2448-2455 del expediente penal presentado por el actor).

Tal como hemos advertido, otro elemento a considerar es lo manifestado en el informe de conducta de la institución demandada cuando menciona lo siguiente:

“En ese sentido, no puede soslayarse que las normas constitucionales y legales reconocen el derecho de impugnar o presentar recursos frente a decisiones judiciales que las partes consideren le son adversas. **Por tanto, el ejercicio y posterior decisión de los recursos, representa el reconocimiento del Estado al debido proceso y, con ello, de poder acceder a mecanismos revisores de los criterios errados o no, de determinadas autoridades o funcionarios; sin que ello represente un automático reconocimiento o aceptación de un hecho dañoso.**” (Lo resaltado es nuestro) (Cfr. foja 68 del expediente judicial).

Lo hasta ahora expuesto permite concluir, que el análisis y consecuente decisión adoptada por el Segundo Tribunal de Justicia, **obedeció en su momento a criterios del proceso de investigación seguido al hoy recurrente**, lo que nos debe llevar a la convicción que las medidas adoptadas fueron acorde, tanto a las pruebas, como a la gravedad de los cargos que se le acusaban y pues al derecho constitucional de segunda instancia, el cual hizo valer la Fiscalía.

En este orden de ideas, si bien el 23 de junio de 2016 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, decidió **casar** la Sentencia de segunda instancia 88 de 20 de mayo de 2014, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y en consecuencia **absuelve** de los cargos que le fueron imputados a **Jorge Pardo Rodríguez** y Alexander Gutiérrez Sierra, no estaríamos ante un escenario en donde, como dispone el artículo 1644 del Código Civil, se haya causado un daño a otro por acción u omisión; ya que, como hemos venido exponiendo, la dilación en cuanto a la determinación de la culpabilidad o inocencia del hoy demandante, no fue producto de una mala gestión del **Órgano Judicial**,

sino propio de las investigaciones realizadas y de los trámites propios de un proceso penal como el desarrollado.

Debemos advertir que el actor tuvo a su disposición el uso de todos los medios procesales que consideró oportunos tanto en el Ministerio Público como en el Órgano Judicial para ejercer su defensa y obtuvo respuestas en su momento a dichas solicitudes.

Lo expuesto hasta aquí, nos permite concluir que en el presente proceso **no han concurrido los elementos necesarios para que se configure la alegada responsabilidad del Estado**; a saber: *1) La falla del servicio público por irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo; 2) El daño o perjuicio; y, 3) La relación de causalidad directa entre la falla del servicio público y el daño; ninguno de los cuales se ha producido en la situación bajo análisis*, tal como expondremos a continuación.

A. Respecto a la alegada prestación deficiente del servicio público.

Como expusimos en su momento, una vez ingresó la causa penal que nos ocupa, el Ministerio Público procedió de manera diligente, a definir todas las actuaciones que estaban supuestas a surtirse dentro del proceso y remitió las investigaciones completas al **Órgano Judicial**, el cual continuó de manera diligente y apegado a la Ley con el proceso penal.

En atención a lo indicado, no existe una deficiente prestación del servicio público atribuible al Estado, por conducto del **Órgano Judicial**.

B. Ausencia de un daño atribuible a la entidad demandada.

Tal y como hemos indicado, al actor se le permitió su representación en todo momento por su apoderado judicial por lo que el tiempo transcurrido fue propio de una situación procedimental de las investigaciones de la cual fue objeto **Jorge Pardo Rodríguez**.

Sobre el particular, cobra relevancia precisar que la responsabilidad que se le exige al Estado tiene como razón de ser el **daño**; no obstante, de acuerdo al profesor Juan Carlos Henao, **“el daño es la causa necesaria pero no suficiente para declarar la responsabilidad, esto es, que no siempre que exista daño el Estado habrá de ser responsable”** (Henao, Juan Carlos. El Daño. Análisis comparativo de la responsabilidad del Estado en derecho colombiano y francés. Universidad Externado de Colombia. Pág. 38).

Bajo la premisa anterior, la doctrina ha señalado que **“el daño”** se constituye siempre que se configuren sus características, pero su condición primigenia es que sea **antijurídico**, lo que implica que la indemnización solicitada **no corresponda a una carga pública que todo particular deba soportar**, pero además, que el mismo sea, **cierto, concreto o determinado y personal**.

Al respecto, resulta de suma importancia hacer referencia a lo expresado por el autor Wilson Ruiz Orejuela, quien, al manifestarse en relación al daño antijurídico, ha expresado lo siguiente:

“Ahora, el daño como fundamento esencial de responsabilidad civil, en este caso de la responsabilidad civil extracontractual del Estado, por supuesto debe ser antijurídico, un daño no contemplado por la Ley como carga pública que toda particular deba soportar. En este punto es propio destacar que no todo daño es indemnizable, porque la condición primigenia para ello es que sea antijurídico, pues existen innumerables obligaciones y cargas que pueden lesionar derechos personalísimos o el patrimonio de las personas... que son verdaderas cargas públicas consagradas en la Ley, que en condiciones de igualdad todos estamos en la obligación de soportar. Es precisamente ese umbral de lo que todos los ciudadanos deben asumir en beneficio de la colectividad lo que establece el límite para considerar que el daño se convirtió en antijurídico y superó lo que razonadamente debe tolerar un ciudadano para contribuir al interés colectivo y es en ese momento en que debe valorarse el daño como indemnizable.” (OREJUELA RUIZ, Wilson. Responsabilidad del Estado y sus Regímenes. Ecoe Ediciones. Colombia. 2010.) (La negrita es nuestra).

De la lectura de lo anterior, se desprende que el **daño indemnizable es aquel que es antijurídico**, es decir, **aquel que implica a la persona una carga que no estaba obligada a soportar**.

Sobre la base de lo expuesto, debemos precisar, que **si bien el actor pudo sufrir un daño** como consecuencia de la detención preventiva y del proceso penal en general, **no podemos perder de vista que dicho daño no puede ser considerado como antijurídico**, habida cuenta que **se trató de una carga que el recurrente estaba obligado a tolerar**; ya que, tal y como mencionamos con anterioridad, la adopción de la referida medida cautelar cumplió en su momento con todos y cada uno de los presupuestos necesarios para su aplicación y el proceso penal se desarrolló igualmente basado en la normas constitucionales y legales.

De igual manera, ante el hecho de haber sido objeto de una investigación, el actor debía afrontar los rigores de la misma hasta que se decidiera su inocencia o culpabilidad. Es decir, se trata de una carga que toda persona en igualdad de circunstancias debe afrontar pues forma parte de los procedimientos legales correspondientes, de manera que, como hemos indicado, no nos encontramos frente a un daño antijurídico.

C. Inexistencia de un nexo de causalidad.

En este orden de ideas, precisamos, tal como lo hemos expuesto con anterioridad, que en este proceso no se ha dado, por acción ni por omisión, actuaciones por parte del **Órgano Judicial** que vulneren normas vigentes, ni derecho alguno del actor; y, además, **que el supuesto daño al que éste hace alusión no se deriva de un actuar negligente de la entidad demandada**; en consecuencia, en este proceso tampoco se encuentra presente el tercer elemento descrito en la doctrina y la jurisprudencia como necesario para que exista la obligación a reparar civilmente; a saber, **un nexo o relación de causalidad entre**

el llamado actuar deficiente del Estado y el daño sufrido, toda vez que el Órgano Judicial cumplió con las normas constitucionales y legales que reconocen el derecho de impugnar o presentar recursos frente a decisiones judiciales.

Al respecto, a nivel doctrinal el autor Libardo Rodríguez en relación con el nexo o relación de causalidad ha señalado lo siguiente:

“Entre la actuación imputable a la administración y el daño causado, debe existir una relación de causalidad, lo cual quiere decir que el daño debe ser el efecto o el resultado de aquella actuación. Para que exista esa relación de causalidad, el hecho o actuación debe ser apto o idóneo para causar dicho daño. Por otra parte, como consecuencia de la necesidad de este nexo, si el daño no puede imputarse a la actuación de la administración, no habrá responsabilidad de ella, como sucede cuando el daño es producido...por el hecho de un tercero o por culpa de la víctima.” (Rodríguez, Libardo. Derecho Administrativo General y colombiano. Temis. Colombia. 2008. Página 509) (La negrilla es nuestra).

Por todo lo anterior, podemos señalar que **en el negocio jurídico en estudio no concurren los elementos que el Tribunal, en la Sentencia de 2 de junio de 2003, determinó que eran necesarios para atribuirle responsabilidad extracontractual al Estado. Veamos:**

“Nuestra tradición jurídico contencioso administrativa, particularmente la colombiana (Sentencia de 31 de mayo de 1990 del Consejo de Estado, expediente La responsabilidad extracontractual del Estado surge cuando concurren tres elementos, a saber: 1. **La falla del servicio público por irregularidad, ineficacia o ausencia del mismo;** 2. **El daño o perjuicio;** 3. **La relación de causalidad directa entre la falla del servicio público y el daño.**

La relación de causalidad entre la falla del servicio y el daño debe ser directa. Así el tratadista francés André (sic) De Laubadère al explicar las características del daño sujeto a reparación observa que el Consejo de Estado de Francia ha señalado que el daño debe tener frente a la acción administrativa una relación de causalidad directa y cierta (Sentencia de 4 de octubre de 1968 caso Doukakis). El mismo autor agrega que ‘las dificultades de esa característica aparecen sobre todo en el caso de la pluralidad de causas del daño y de la interposición de un hecho del hombre entre la falla administrativa y el daño... la jurisprudencia ha sopesado la llamada teoría de la equivalencia de condiciones, para investigar entre los

hechos que precedieron al daño aquel que deba ser considerado como la causa del mismo' (Traite de Droit Administratif. André De Laubadère, Jean Claude Veneziae Yves Gaudemet, Editorial L.G.D.J., París, Tomo I, undécima edición, 1990, pág.817.Mi traducción).

En este caso no existe una relación de causalidad directa entre la falla del servicio administrativo y el daño... (La negrita es nuestra).

En cuanto al supuesto daño causado producto del mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos, la Sala Tercera, mediante la Resolución de 24 de marzo de 2015, explicó qué es daño y como procede su resarcimiento:

“ ...

I. Daño

Ahora bien, para que pueda configurarse la responsabilidad de la Administración resulta indispensable determinar la existencia de un daño. El Estado, responderá consecuentemente, de forma directa según el supuesto que se invoque, de los establecidos en el Código Judicial, artículo 97 numerales 8,9 y 10.

El demandante considera que la entidad pública denominada Correos y Telégrafos de Panamá, le causó daños y perjuicios por supuesta mala prestación del servicio postal, en relación a la devolución de un paquete de libros de Derecho provenientes de Francia, con destino al apartado No.0823-02435 (Estafeta de Plaza Concordia), arrendado a la Firma Forense ICAZA, GONZÁLEZ- RUÍZ y ALEMÁN (IGRA).

Esta Sala primeramente debe señalar que **el daño determina, la medida de reparación, pues todo daño causado y nada más que el causado, pone de relieve la naturaleza cierta y exclusivamente resarcitoria de la acción de responsabilidad.**

El daño es el primer elemento que debe quedar claro en un proceso de responsabilidad y de no existir no tiene razón la persona de comparecer a la Sala Tercera, pues no tiene por qué ser favorecida con una condena a favor que no le correspondería, sino que iría a enriquecerla sin justa causa.

Por ello, el daño es la causa de la reparación y la reparación es la finalidad última de la responsabilidad civil.

De allí que, como señaló el profesor René Chapus, (en su obra Responsabilité publique et responsabilité privée; citado por Juan Carlos Henao en su obra El Daño) 'sin perjuicio no hay responsabilidad', y también nos dice el

profesor Chapus que 'la ausencia de perjuicio, es suficiente para hacer vano cualquier intento de comprometer la responsabilidad del Estado'.

Por lo anterior es que el daño constituye un requisito esencial de la obligación de indemnizar y si no se demuestra, no permite que se dé la responsabilidad estatal, por ello la ausencia de daño trae consecuencias negativas para quien intenta una acción en un proceso de reparación, pues ésta no se puede declarar si el daño no se prueba. El daño debe ser probado en el expediente por quien lo sufre, y es importante que lo haga conocer en el proceso.

El principio fundamental de la indemnización es el resarcimiento económico, pago o compensación de un daño o perjuicio causado, como se ha venido señalando pues, el daño es 'el lesionamiento, o menoscabo, que se ocasiona a un interés perturbado o agredido' (MARTÍNEZ, Gilberto. Responsabilidad Civil, Biblioteca Judicial, Octava Edición Bogotá, 1995, pág. 18).

...

III. Nexo Causal

Antes de entrar a conocer en el proceso lo referente al nexo causal es importante que establezcamos su concepto, el cual se transcribe para su mejor ilustración:

'Puede suceder que una persona se haya comportado en forma ilícita y en forma paralela o simultánea un tercero haya sufrido un perjuicio. En tales circunstancias, no existirá responsabilidad civil de quien se comportó en forma ilícita mientras dicha persona no haya sido la causante del perjuicio sufrido por la víctima. En general, ésta es una exigencia de todo el mundo normativa, sea religioso, moral o jurídico. Uno solo responde por los efectos de su propia conducta.

Este postulado, que no pareciera tener dificultad alguna, está sin embargo impregnado de problemas de tipo práctico y teórico; hasta el punto que los autores prefieren no extenderse demasiado en su análisis.

En efecto, **causalidad jurídica significa que el hecho le es imputable jurídicamente al demandado.** Ahora bien, en no pocas oportunidades la causalidad física constituye al mismo tiempo causalidad jurídica. Es lo que ocurre, por ejemplo,

cuando una persona causa una lesión a otra de forma dolosa. En tales circunstancias, existe tanto causalidad jurídica como causalidad física. (TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo I, Editorial Legis, Colombia, 2009, págs. 248-249).'

El recurrente alega que los Correos y Telégrafos de Panamá, es responsable de los daños y perjuicios materiales y morales que alega fueron causados por dicha entidad al no entregarle una correspondencia procedente de Francia y enviarla de vuelta al remitente, lo que según alega, lo perjudicó en sus labores, pues se trataba de información actualizada que serviría para su ejercicio profesional.

Para determinar la responsabilidad de la Administración también resulta indispensable la existencia de un nexo causal entre el daño causado a la persona y la actuación de la Administración.

La Sala observa que, la secuencia de hechos que precedieron a la presente demanda contencioso administrativa de indemnización ponen de manifiesto el hecho que no existe prueba alguna que acredite que el demandante tiene derecho al monto de dinero que reclama por los supuestos daños y perjuicios materiales y morales que alega haber sufrido en sus labores; ello se desprende de lo siguiente:

Mediante Nota AL-453-09 suscrita por la Jefa de Asesoría Legal, Encargada de la Dirección General de Correos y Telégrafos se solicita al Jefe de Inspección Postal, Caín Lasso, que investigara lo sucedido en torno a la devolución de un paquete de libros de Derecho provenientes de Francia, con destino al apartado No.0823-02435 (Estafeta de Plaza Concordia), arrendado a la Firma Forense ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ y ALEMÁN (IGRA).

...

En el presente negocio, de acuerdo a lo antes expuesto y de acuerdo a las constancias procesales examinadas, esta Sala advierte primeramente que no se ha comprobado la existencia del daño que se reclama y menos aún que exista una relación de causalidad directa entre éste y la supuesta falla del servicio que alega el demandante, puesto que no se ha comprobado que el Estado sea por parte de los Correos y Telégrafos de Panamá responsable de haber brindado un servicio público defectuoso que haya podido ser objeto de indemnización.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que la Dirección de Correos y Telégrafos y el Estado panameño No Están obligados a pagarle a..., la suma de mil quinientos (B/.1,500.00) que reclama en concepto de daños y perjuicios materiales y morales, ocasionados por el mal funcionamiento de los servicios a ella adscritos.

..." (Cfr. La negrita es nuestra).

En virtud de las consideraciones expuestas, esta Procuraduría solicita respetuosamente a los Honorables Magistrados se sirvan declarar que el Estado panameño, por conducto del **Órgano Judicial, NO ES RESPONSABLE** por el supuesto deficiente funcionamiento del servicio público de administración de justicia alegado por el actor; y, en consecuencia, **NO ESTÁ OBLIGADO** a pagar la suma de ochocientos mil balboas (B/.800,000.00), en concepto de daños y perjuicios.


IV. Pruebas: Se aduce como prueba documental de esta Procuraduría, solicitar copia autenticada del expediente penal, que guardan relación con el caso que nos ocupa, que reposa en el Juzgado Decimocuarto de Circuito Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

V. Derecho: No se acepta el invocado por el demandante.

VI. Cuantía: Se niega la cuantía

Del Honorable Magistrado Presidente,


Rigoberto González Montenegro
Procurador de la Administración


Mónica I. Castillo Arjona
Secretaría General